

—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Anza.*—*S. Guzman.*—*L. Guzman.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Febrero veintidos de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

## TERRENO BALDIO.

*Adjudicación en propiedad verificada en el Estado de Chiapas.*

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

“Ciudadano Juez de Distrito:

El ciudadano Pilar Rodríguez denunció en Octubre de 1854 el terreno nombrado Jesus María, que estaba poseyendo y cultivando, y había denunciado desde el año de 1844; para reducirlo á propiedad con arreglo á la ley entonces de la materia, acreditó la nacionalidad de los terrenos y una posesión de ocho á doce años, pues los testigos que adujo son varios en este particular. El denuncia lo fué admitido y las diligencias pasaron al agrimensor.

El 10 de Setiembre de 1870, la Sra. Isidora Rodríguez, viuda del ciudadano Pilar Rodríguez, y los herederos de este, vendieron con licencia judicial al ciudadano Isidoro Gurría la expresada finca Jesus María con todos sus enceros: que ajustada la compra venta por el precio de dos mil cuatrocientos cincuenta y un pesos, quince y medio centavos, el ciudadano Gurría manifestó que la tal compra era hecha á favor de su señora madre política, Petrona Ramos, á quien quedó fincada la compra venta expresada; que en este estado se siguió el juicio de denuncia, se le han dado los trámites de la ley y no ha habido oposición: que por virtud de lo expuesto que es lo que arrojan las constancias de estos autos, se está en el caso de adjudicarlos en propiedad á la Sra.

Ramos; pero que es de considerarse: que está probada la posesión, el cultivo y aun el asentamiento: que aunque la parte no haya solicitado la gracia que la ley de la materia le otorga, es un precepto legal estar á lo probado, como lo es también el de arreglarse á lo que previene el artículo 5º de la ley de 22 de Julio de 1863, debiendo también considerarse que la Sra. Ramos es colindante y debe pagar la alcabala que previene el artículo 28 de la misma ley, esta promotoría pide: que se adjudique en propiedad á la Sra. Petrona Ramos el terreno denunciado nombrado Jesus María, con la rebaja del precio que manda el artículo 5º citado, pagando la alcabala que dispone el 28 y reponiendo las fojas 3ª y 4ª con el papel del sello correspondiente.—Promotoría fiscal de Hacienda. Chiapas, Febrero seis de mil ochocientos setenta y uno.—*José Velasco Sanchez.*”

### *Sentencia del Juez de Distrito.*

“Juzgado de Distrito del Estado de Chiapas.

Chiapas, Febrero ocho de mil ochocientos setenta y uno.

Vistos: de conformidad con el pedimento fiscal que precede y por sus fundamentos, este juzgado definitivamente resolviendo ha venido en declarar y por la presente declara:

1º Se adjudica en propiedad y sin perjuicio de tercero á la Sra. Petrona Ramos de Rabelo, vecina de pueblo Juárez del departamento de Pichucalco, el terreno nacional en que está situada la finca denominada Jesus María, ubicada en aquella misma jurisdicción y compuesta de mil ciento cuarenta y una hectáreas, doce aras y diez centiaras; debiendo gozar la interesada de la baja de la mitad de su precio de tarifa y satisfacer el veinticinco por ciento de alcabala extraordinaria.

2º Hágase saber á quienes corresponda; remítase á la Gefatura superior de Hacienda

da para la liquidacion respectiva, y fecha clévese testimonio en forma al Ministerio de Fomento, por conducto del Gobierno del Estado, para lo que haya lugar, reponiéndose por la parte interesada el papel sellado que ha dejado de usarse.

El ciudadano Licenciado Juan José Ramírez, Juez de Distrito propietario, lo decretó y firmó por ante mí el infrascrito secretario.—Doy fé.—*Lic. Juan J. Ramírez. J. Crisóstomo Lara.*

Es copia fielmente sacada de su original. Chiapas, Febrero ocho de mil ochocientos setenta y uno.—*Crisóstomo Lara.*

## AMPARO.

*Juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de México por Pascual Valdés y Valentín Piña, contra el Gefe Político de la ciudad de Toluca, ciudadano Nolasco Cruz, que los sentenció á la pena de muerte, sin ser el juez competente que debe juzgarlos.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez 1º suplente:

El Promotor fiscal dice: Que el ciudadano Gefe Político del Distrito de esta ciudad, en 25 de Diciembre del año próximo pasado, sentenció á la pena de muerte á los reos Pascual Valdés y Valentín Piña, por el delito de plagio, verificado en 23 de Abril de 1868, en la persona del ciudadano Sebastian Silva, vecino de la hacienda de Nijini, en jurisdiccion de Ixtlahuaca, habiendo fundado el procedimiento en la ley de 9 de Abril último, é imponiendo la pena que señala el artículo 3º de la propia ley.

El que lleva la voz, ya manifestó en la respuesta del día 19 de Enero, que la queja de los expresados reos era arrojada á la ley orgánica, y que procedió el recurso de amparo.

En efecto, consta en autos que fueron juzgados y sentenciados Pascual Valdés y Valentín Piña por el plagio del ciudadano Silva, apareciendo probado que aquel delito se perpetró el 23 de Abril de 1868, y constando por otra parte en los mismos autos, que en aquella fecha aun no se había publicado en el Distrito de Ixtlahuaca el decreto del Estado de 21 de Abril del propio año. Tampoco en Abril de 68 se había expedido la ley general de 9 del mismo mes, conforme á la cual se los juzgó.

Los hechos que se indican, se registran en las justificaciones que remitió á este Juzgado el ciudadano Gefe Político y comunicacion recibida del Supremo Gobierno del Estado.

El mismo ciudadano Gefe, en su informe de 13 de Enero, hace la observacion de que la autoridad tuvo jurisdiccion para juzgar á los referidos reos, deduciendo, que con su procedimiento no habia violado las garantías constitucionales que invocaban los quejosos: que no procedia el amparo que pretendian, porque el caso se hallaba comprendido en el artículo 8º de la ley de 20 de Enero de 1869.

Sostiene tambien, que la pena de muerte á que fueron sentenciados, estaba bien aplicada, porque el decreto del Estado que la establece fué publicado en esta ciudad el día 21, antes que cometieran el delito: asercion que despues modifica en su oficio del día 24, pues en él manifiesta que la publicacion del referido decreto se hizo en esta capital el día 23 del referido mes y año.

El que habla cree que la cuestion que entraña el presente juicio es clara, porque se trata de la aplicacion de la ley á los hechos que aparecen justificados en los autos. Queda solo por contestar la observacion que hizo en su informe el ciudadano Gefe Político, de que el presente caso se halla comprendido en el artículo 8º de la ley de 20 de Enero de 1869.

Las autoridades á quienes la ley general de 9 de Abril del año próximo pasado les cometió la facultad de juzgar y conocer en